

Documentos de la

DEMOCRACIA

#10

*El
Derecho de la Gente a la Información:
Transparencia en las
Instituciones del Gobierno*

por

Rodney A. Smolls

we the people

Documentos de la

DEMOCRACIA

*“El poder de ocultar
los hechos de un gobierno
es el poder de destruir
a ese gobierno”*

*-Informe del Comité sobre
la Libertad de la Información*

*Cámara de Representantes de los EE.UU.
(1976)*

Director Ejecutivo: George Clack / **Editor:** Melvin Urofsky

Director Administrativo: Paul Malamud. / **Director Artístico:** Thaddeus A. Miksinski, Jr.

Traducción: Angel Carlos González / **Composición Tipográfica:** Leticia Fonseca G.

ACERCA DEL AUTOR:

Rodney A. Smolls es Profesor Atilen de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Richmond. Este académico, autor y abogado, es un perito en derecho constitucional.

La expresión “el derecho de la gente a la información” se repite con frecuencia como una consigna política y jurídica. Estas palabras se asocian a menudo con la información sobre el gobierno que solicitan los medios de comunicación y que invocan los periodistas que desean justificar la publicación de material controvertido. Sin embargo, “el derecho de la gente a la información” también puede tener un significado diferente, al margen del concepto de la libertad de prensa: un significado que en verdad se arraiga en el pueblo y se refiere al derecho de la gente a saber lo que hace su propio gobierno. Lo que nos interesa aquí es esta variante de la expresión “el derecho de la gente a la información”, enfocada en lo que se designa muchas veces en la época moderna como la transparencia del gobierno.

Esta apertura en las actividades del gobierno, este ejercicio gradual de transparencia, es a menudo un proceso difícil y complejo, un proceso que muchas veces requiere un cuidadoso equilibrio entre intereses que compiten entre sí. Al gobierno abierto se asocian los valores de la rendición de cuentas y los de la participación democrática. Sin embargo, a veces el gobierno abierto puede ser costoso, tal vez sacrifique ciertos intereses legítimos en términos de sencillez o eficiencia en sus filas, y puede poner en peligro otros valores sociales deseables, como la protección de la confidencialidad del individuo, la seguridad nacional y la aplicación de la ley. Los gobiernos democráticos deben ser, en gran parte, regímenes abiertos y transparentes. No obstante, hasta el más abierto y democrático de los gobiernos requerirá cierta dosis de sigilo o confidencialidad, en algunos aspectos, para que su funcionamiento sea satisfactorio.

En su esfuerzo por lidiar con esos intereses antagónicos, Estados Unidos ha enfocado tres problemas principales: (1) el acceso a los registros y documentos públicos donde se asientan “los asuntos del pueblo” en cualquier forma tangible; (2) el acceso a las instancias de gobierno de tipo deliberati-

vo, como las reuniones y los foros que son convocados para el debate y la resolución de asuntos públicos; y (3) el acceso a lugares en los que se llevan a cabo actividades gubernamentales de tipo rutinario y no deliberativo, como las cárceles, los hospitales o las escuelas que administra el gobierno.

Libertad de la información: el acceso a registros y documentos

En los Estados Unidos, la experiencia con la “libertad de la información”, el concepto según el cual existe un firme derecho legal de acceso a los registros y documentos del gobierno, es un fenómeno relativamente reciente que no comenzó a cobrar fuerza sino hasta la década de 1960. El Congreso de los EE.UU. aprobó en 1967 la Ley de la Libertad de la Información (de carácter federal, conocida de ordinario como la FOIA por sus siglas en inglés), en respuesta a la creciente sensación de que la ley federal anterior se solía invocar como justificación para retener información y no como un acicate positivo para la divulgación de la misma. La FOIA creó un amplio mandato de que la información oficial esté al alcance del público para que éste la examine. Esta es la norma, la regla “predeterminada” y los tribunales del país han destacado una y otra vez que, bajo la FOIA, las agencias federales deben responder sin dilación y a conciencia todas las solicitudes de información de los ciudadanos.

La FOIA señala nueve exenciones de la divulgación obligatoria. Esas exenciones, las únicas que la ley permite, tienen el fin de establecer normas concretas para determinar si un material en particular se puede mantener en plan confidencial o ha de ser divulgado. Las cortes le brindan al ciudadano agraviado un remedio expedito en los casos en que una agencia se niega a divulgar materiales invocando alguna de esas exenciones. Si la corte juzga que la agencia actuó mal al no mostrar dicho material, ordena que éste sea divulgado y puede sancionar a la agencia con una multa.

La FOIA fue concebida en términos amplios. Trata de brindar acceso a información oficial que se ha mantenido oculta para el público por largo tiempo y en forma innecesaria, e intenta dotar a éste de un derecho con validez jurídica para obtener esa información de fuentes oficiales que tal vez

se niegan a divulgarla. Las nueve exenciones fueron incluidas en la ley con el fin de proveer una fórmula práctica que abarque, equilibre y proteja todos los intereses, pero haga énfasis en que la divulgación se lleve a cabo en forma plenamente responsable. Las referidas exenciones son:

(1) secretos de seguridad nacional relacionados con la defensa nacional o la política exterior;

(2) materiales que sólo se refieran a las reglas y las prácticas internas del personal de una agencia;

(3) materiales a los cuales otra ley federal haya declarado exentos de divulgación, en forma específica;

(4) secretos de comercio e información financiera o comercial de índole privilegiada o confidencial;

(5) cartas o memorandos internos o entre agencias que, conforme a derecho, no se deban revelar a nadie más que a otra agencia que esté en litigio con la primera;

(6) expedientes médicos y de personal, y archivos similares cuya divulgación pueda constituir una clara e injustificada intromisión en la confidencialidad de una persona;

(7) registros de información compilados con miras a la aplicación de la ley, pero solo en la medida en que sea razonable suponer que la exhibición de esos registros o informes para la procuración de justicia podría interferir con los procedimientos de ejecución; que podría privar a una persona del derecho a un juicio justo o a una adjudicación imparcial; que constituiría una intromisión no justificada en la confidencialidad de una persona; o que sería previsible suponer que revelaría la identidad de una fuente confidencial. En el caso de la información que ha sido recopilada por alguna autoridad de procuración de justicia en el curso de una investigación penal, o bien, por una agencia a cargo de cualquier investigación de inteligencia cuyo objetivo es la seguridad nacional, la FOIA declara que toda la información procedente de una fuente confidencial debe estar exenta del requisito de divulgación pública en los siguientes casos: si el hecho de revelarla implica el riesgo de divulgar las técnicas y los procedimientos empleados por los



investigadores o los fiscales a cargo de la aplicación de la ley; si al hacerlo se revelan las directrices de las investigaciones o los procedimientos de procuración de justicia; si es válido suponer en forma razonable que la divulgación implica el riesgo de incurrir en la omisión de la ley o si cabe una suposición razonable de que al hacerlo se pondría en peligro la vida o la seguridad física de algún individuo;

(8) materiales relacionados con exámenes y regulación de bancos e instituciones financieras; o

(9) información y datos geológicos y geofísicos, incluso mapas con datos sobre pozos.

Algunas de las exenciones mencionadas requieren un punto de equilibrio entre importantes intereses antagónicos de políticas; otras implican cuestiones relativamente específicas y de aplicación más estrecha, como la ubicación de pozos o la regulación de bancos. Los tres rubros principales de los debates y litigios importantes en materia de políticas, en la administración de la FOIA, se han referido a la exención por motivos de seguridad y defensa nacional, las exenciones por la aplicación de la ley y las exenciones destinadas a proteger el derecho a la confidencialidad individual.

Es especialmente aguda la tensión entre los valores de un gobierno abierto y los valores de lo confidencial. Sobre todo con la creación de las modernas bases electrónicas de datos, en la sociedad contemporánea casi nadie puede mantener en absoluto secreto un sinfín de datos acerca de sí mismo. Muchos datos sobre el individuo llegan a manos de agencias del gobierno por motivos legítimos y se guardan en bases de datos bajo el control de éste. Por lo tanto, para que la protección de la confidencialidad tenga sentido, es preciso reconocer que si bien un secreto total no es factible en la era moderna, sí es posible idear leyes para garantizar que la divulgación sea muy selectiva, y esas leyes serán un paso importante hacia la creación de, por lo menos, cierta protección de la confidencialidad del individuo.

Varias leyes estatales sobre la libertad de la información son el complemento de la FOIA federal. Todos los estados de los EE.UU. tienen leyes estatales que brindan acceso al público a los registros de los gobiernos estatales y locales. Esas leyes varían de un estado a otro. Muchas de ellas se apegan con fidelidad al modelo de la FOIA federal, es decir, instituyen un amplio mandato de acceso a materiales del gobierno y añaden al final una lista de excepciones.

Por largo tiempo, los costos de las leyes sobre la libertad de la información en el nivel nacional y local han sido tema de intenso debate público. Bajo la FOIA, parte del costo directo de cada servicio suele repercutir en quien lo ha solicitado. Por ejemplo, los costos de la búsqueda y los gastos de fotocopiado se indican de ordinario en listas de cuotas uniformes que mantienen las agencias. Sin embargo, gran parte del costo indirecto de la FOIA — o bien, si usted lo prefiere, “los gastos generales de la apertura” — es absorbido por la agencia como una partida de su presupuesto de operación. Sin duda alguna, la libertad de la información hace que el gobierno sea más costoso porque necesita contratar empleados para indexar, organizar, almacenar

y recuperar datos, creando así la maquinaria administrativa que la agencia requiere para ser capaz de responder en forma adecuada a las solicitudes amparadas por la FOIA.

Los estadounidenses se han percatado de que una cosa es hacer que el valor de la libertad de la información se consagre en una ley formal, y otra tratar de cambiar la cultura de un gobierno, de modo que sus funcionarios se ciñan al espíritu de un gobierno abierto y se esfuercen por facilitar el acceso a los registros públicos, en lugar de frustrar o socavar esa apertura. En los primeros años después de la promulgación de la FOIA, muchas agencias vieron a ésta como una molestia, como algo que debían eludir o frustrar en el mayor grado posible. Sin embargo, las actitudes han cambiado poco a poco y una nueva generación de funcionarios públicos se muestra mucho más abierta y receptiva a la idea de brindar acceso a los registros públicos en forma sencilla y generosa.

Hasta cierto punto, el cambio de cultura se puede atribuir a las nuevas tecnologías de la informática en los años 90. Muy al margen de la cuestión del acceso a los datos del gobierno, la Internet ha creado una “cultura de la información”, en la cual la gente de todo el mundo se habitúa cada día más a la capacidad de obtener una amplia gama de información con rapidez y a bajo costo, con sólo buscar en bases de datos desde su propia computadora. Una generación entera de personas de todo el mundo ya ha empezado a pensar que la facilidad de acceder a la información a través de la Internet es virtualmente un derecho tan natural como respirar el aire circundante. En los países democráticos, la gente tiene una tendencia natural a sentir que el gobierno le pertenece cada vez más. Arrecia la impresión de que una de las obligaciones básicas de un régimen democrático es hacer que los registros de éste sean fácilmente accesibles en línea. Así, los ciudadanos no sólo esperan gozar de la libertad de la información: hoy aspiran también a

Una generación entera de personas de todo el mundo ha empezado a pensar que la facilidad de acceder a la información por la Internet es virtualmente un derecho tan natural como respirar el aire circundante. En los países democráticos, la gente tiene una tendencia natural a sentir que el gobierno le pertenece cada vez más.

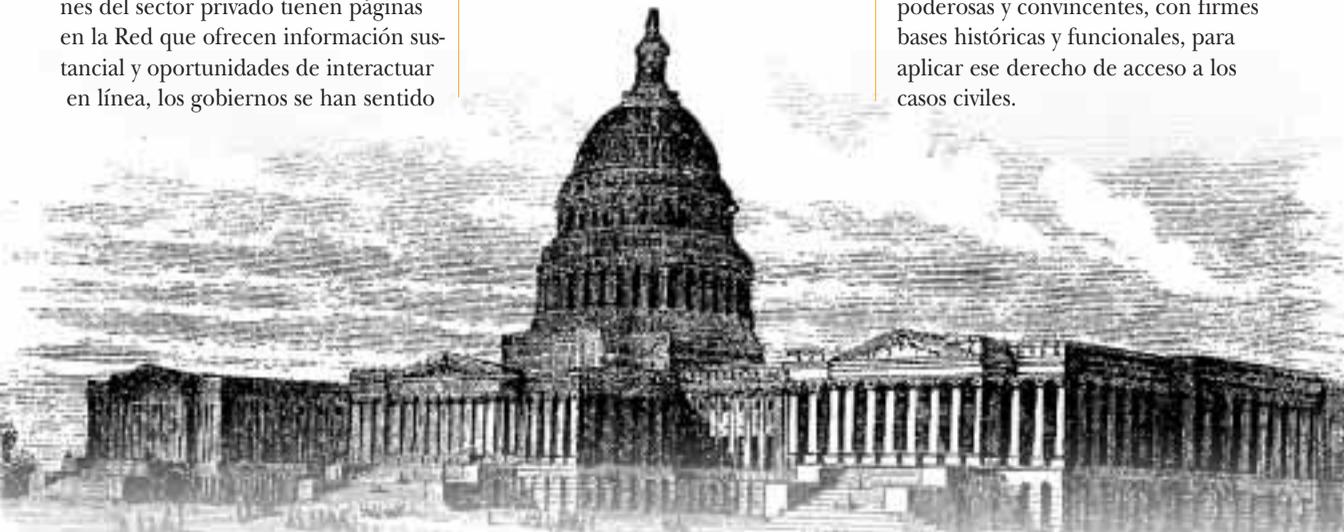


gozar la libertad de la información en línea. Esta percepción va en aumento y se introdujo en la ley federal de los Estados Unidos en 1996, mediante la aprobación de la Ley de la Libertad de la Información Electrónica, en la cual se establece con claridad que en el concepto de “registros públicos” se debe incluir a los que se guardan en un formato electrónico, y se exige que las agencias federales permitan el acceso a sus registros por vía electrónica.

A medida que la Internet ha madurado y se ha vuelto una parte tan importante de la cultura de masas, donde casi todas las empresas y organizaciones del sector privado tienen páginas en la Red que ofrecen información sustancial y oportunidades de interactuar en línea, los gobiernos se han sentido

datos y registros del mismo, sino también a los propios procesos de toma de decisiones de aquél. En los Estados Unidos hay una fuerte tradición, protegida en parte por la misma Constitución del país, que garantiza el derecho de acceso del público a los procedimientos de los tribunales y los órganos legislativos. En épocas más recientes, esa tradición se ha complementado con la aprobación de las leyes federales y estatales conocidas por la gente como “leyes a plena luz del sol”, que garanti-

científicos conductistas, de que los juicios públicos tenían un valor terapéutico notable para la comunidad. Aun sin esos expertos que plasmaran el concepto en palabras, la gente se percató, a fuerza de experiencia y observación, de que los medios empleados para hacer justicia deben contar con el apoyo que proviene de la aceptación pública del proceso y de sus resultados, sobre todo en la administración de la justicia penal”. Este derecho de asistir a los juicios penales ha sido ampliado por muchas cortes de los Estados Unidos para incluir también los juicios civiles. Y sin duda hay razones poderosas y convincentes, con firmes bases históricas y funcionales, para aplicar ese derecho de acceso a los casos civiles.



obligados a competir en el mercado electrónico y volverse “accesibles para la Internet”. En los niveles nacional y local, las agencias del gobierno están ampliando cada vez más sus bases de datos en línea y ofrecen los registros públicos en un formato de fácil acceso para todos los ciudadanos que dispongan de una computadora y un módem. A la postre, esto también puede resolver una de las grandes preocupaciones que las leyes sobre la libertad de la información suscitan en materia de costos. En virtud de que los datos del gobierno se conservan a menudo en formato electrónico, tal vez las agencias se percaten de que es relativamente fácil proveer libre acceso a los datos de los registros públicos si solo usan un *software* que simplifique la localización y recuperación de esos datos por los ciudadanos ordinarios que son usuarios de Internet.

zan también el acceso del público a las reuniones de las agencias ejecutivas y administrativas.

En el caso *Richmond Papers, Inc. vs. Virginia*, la Corte Suprema de los EE.UU. resolvió en 1980 que la garantía sobre la libertad de palabra, contenida en la Primera Enmienda de la Constitución del país, incluye el derecho de la gente a tener acceso a los juicios penales. El meollo de este derecho es el reconocimiento del papel vital que desempeña en la vida democrática del país el acceso del público a los procesos penales. Tal como lo explicó la Corte Suprema a través de la opinión de su presidente Burger, para la mayoría, “la lejana historia de los juicios abiertos [de la época colonial en los EE.UU.] refleja en parte el reconocimiento, que se generalizó mucho antes que existieran

Como dijo en una ocasión el juez del siglo XIX Oliver Wendell Holmes, el acceso a los procesos judiciales civiles es “de gran importancia” en virtud de “la seguridad que esa publicidad otorga para la recta administración de la justicia.... Es deseable que los juicios de causas [civiles] se ventilen a la vista del público, no porque las querellas de un ciudadano con otro sean de interés para el público, sino porque es de la más alta trascendencia que quienes administran la justicia actúen siempre bajo la sensación de su responsabilidad pública y que todo ciudadano tenga ocasión de cerciorarse por sí mismo de la forma en que esa obligación pública se lleva a cabo”.

En la era moderna de la televisión, el derecho del público a asistir a los procesos judiciales se ha fortalecido por la costumbre, cada día más común en los Estados Unidos, de permitir el acceso a las cámaras de televisión para transmitir los juicios. Hoy en día, no existe un derecho constitucional de llevar cámaras a los tribunales que esté reconocido por las cortes del país, pero ya sea por estatuto de los estados o por

Acceso a los procesos de deliberación del gobierno

La apertura y la transparencia del gobierno no sólo son aplicables a los



reglas forenses locales, muchas cortes permiten ahora en forma habitual la presencia de cámaras de televisión que graban y transmiten los juicios. De hecho, en los EE.UU. hay una cadena de televisión por cable, conocida como la TV Judicial, que transmite juicios reales como parte de su programación principal, hora tras hora y día tras día. En los Estados Unidos de hoy, es más común que este derecho de acceso se conceda en las cortes estatales que en las federales.

La Corte Suprema de los EE.UU. no autoriza la presencia de cámaras en su recinto ni las transmisiones de radio en vivo. En años recientes, la Corte ha grabado sus procesos en cintas de sonido y luego las ha dado a conocer, al inicio del siguiente periodo, a través del Archivo Nacional. Para honrar esa tradición, durante el dramático litigio en la Corte Suprema en torno a la elección presidencial del año 2000, ese tribunal permitió que los medios de noticias transmitieran una grabación en cinta de todo el proceso, en cuanto éste concluyó, en reconocimiento del intenso interés del público. Así, los estadounidenses pudieron escuchar las audiencias, que duraron cerca de una hora y media, unos cuantos minutos después de su conclusión.

En todos los tribunales donde se permite el acceso a cámaras o micrófonos, los jueces suelen gozar de un alto grado de discreción para establecer reglas y procedimientos básicos que minimicen el efecto perturbador de las cámaras y micrófonos, y garantizar que su presencia no merme la importancia vital de garantizar un juicio justo.

En el nivel legislativo, hay una larga tradición de deliberaciones abiertas entre los legisladores de los Estados Unidos. En general, esto no está garantizado por documentos constitucionales, sino se confía a la discreción de los órganos legislativos. A pesar de todo, por una firme tradición, la mayoría de los procedimientos legislativos del Congreso de los EE.UU. y de las legislaturas estatales están abiertos al público. En fecha más reciente, los procesos de los cuerpos legislativos se han vuelto habituales en la televisión. En los Estados Unidos, la Cadena C-Span transmite con regularidad los procedimientos del Congreso, y tam-

bién los de las legislaturas estatales se transmiten ahora, aunque con una asiduidad un poco menor.

En respuesta a la percepción de que con frecuencia las asambleas de las agencias federales, estatales y locales son mucho más importantes para la administración real de los asuntos públicos, que las deliberaciones de los propios cuerpos legislativos, el gobierno federal y muchos gobiernos de los estados han promulgado leyes, conocidas a menudo como “leyes a plena luz del sol”, sobre las reuniones abiertas.

La ley sobre las reuniones federales abiertas conocida como la “Ley del gobierno a plena luz del sol” fue aprobada por el Congreso en 1976. Esa ley dispone que las reuniones de las agencias federales estén abiertas al público. La ley define “reunión” como el efecto de constituir un “quórum” para la conducción de un asunto; es decir, las deliberaciones del mínimo número de funcionarios del gobierno que se requiere para tomar decisiones oficiales en nombre de una agencia. En términos firmes y tajantes, esa ley manda que los funcionarios no deben “realizar o disponer conjuntamente asuntos de la agencia”, si no es en dichas reuniones abiertas, y añade que “todos los aspectos de cada una de las asambleas de una dependencia debe-

rán estar abiertos a la observación del público”.

Como es lógico esperar, hay excepciones, sobre todo las que se remontan a las introducidas por la FOIA, con el fin de que estén exentos de la ley de reuniones abiertas los procesos referentes a la defensa nacional o la política exterior, a las reglas internas de las agencias, a secretos de comercio, a investigaciones para la procuración de justicia, a la regulación de instituciones financieras y a la confidencialidad personal, así como los casos de divulgación en los que un individuo será acusado de un delito o recibirá una censura formal.

La piedra angular de la ley a plena luz del sol es el concepto mismo de “reunión”. En este caso, la ley trata de distinguir entre las deliberaciones formales de un quórum dentro de una agencia, en las que se tomarán decisiones reales que afectarán al público, y las discusiones informales y preliminares de políticas, que son un requisito natural e inevitable del acto de gobernar. Al redactar la definición de “reunión” en la ley a plena luz del sol, el Congreso reconoció que el proceso administrativo se puede realizar en su totalidad a la vista del público. Las discusiones informales de antecedentes que aclaran las cuestiones y exponen ideas diversas son una parte necesaria del trabajo de las agencias del gobierno. Si esas discusiones son perturbadas, la espontaneidad de los funcionarios se inhibe y eso le impone un lastre a la conducción del gobierno sin ofrecer a cambio beneficios públicos apreciables. En esas condiciones, la ley establece un compromiso y sólo es aplicable cuando se reúne por lo menos un quórum de los miembros de la agencia y, en efecto, éstos atienden asuntos oficiales de la agencia o disponen su realización.

También es este caso, el panorama legal se ha ampliado por obra de la televisión. En todo el territorio de los Estados Unidos, los sistemas locales de televisión por cable suelen dedicar uno o dos canales a la transmisión exclusiva de las deliberaciones en el gobierno local, e incluso a la de ciertas asambleas, como las sesiones del gobierno de la ciudad o el condado y las reuniones de las juntas escolares o los comités de zonificación.

En todo el territorio de los Estados Unidos, los sistemas locales de televisión por cable suelen dedicar uno o dos canales a la transmisión exclusiva de las deliberaciones del gobierno local e incluso ciertas asambleas, como las sesiones del gobierno de la ciudad o el condado y las reuniones de juntas escolares o comités de zonificación.

El acceso a sitios públicos

¿Hasta qué punto los ciudadanos de una sociedad libre, incluidos los miembros de los medios de comunicación, tienen un derecho legal de acceso a sitios públicos, como las cárceles o las escuelas que administra el gobierno?

Una solución al problema de la falta de acceso a los sitios que pertenecen al gobierno sería el simple hecho de declarar que a los ciudadanos no se les permite el acceso a ninguno de esos lugares porque, después de todo, se trata de propiedades del gobierno y éste se reserva el derecho de decidir a quién quiere admitir o no en ellas. Sin embargo, la ley de los Estados Unidos ha rechazado este concepto y lo ha sustituido por el conjunto de principios reunidos en la Primera Enmienda bajo el título de “ley del foro público”. Ciertos lugares, como los parques, las principales plazas públicas, las calles y las aceras se consideran “foros públicos tradicionales”, es decir, áreas propiedad del gobierno que éste mantiene “en fideicomiso” para el pueblo; es decir, sitios donde la gente conserva el derecho de reunirse para la expresión y manifestación pacífica de sus ideas, siempre que al hacerlo no perturbe el orden público. Aun más allá de sitios como los parques y las plazas públicas, las cortes de este país han reconocido que otras instalaciones, como auditorios públicos, salones de reunión o el atrio de grandes edificios públicos, se pueden convertir también en “foros públicos” en los que toda la gente tiene derecho de hablar o de escuchar lo que allí se expresa.

A pesar de todo, algunas instituciones del gobierno no son “espacios abiertos” adecuados para la expresión, sino instituciones de trabajo en las que se llevan a cabo las actividades diarias del gobierno. No me refiero aquí a los asuntos que implican deliberaciones o la toma de decisiones del gobierno, ni al tema del acceso a procedimientos oficiales, como las reuniones de las cortes o las agencias administrativas, sino más bien a las demás funciones oficiales que no implican deliberación alguna, como las que se llevan a cabo en los hospitales, las escuelas o las prisiones del gobierno. En forma tradicional, a esas instituciones no se las considera como “foros públicos”. De acuerdo con la tradición, los ciudadanos no tiene ningún derecho legal reconocido para entrar en esas instituciones y sólo se puede conceder



acceso a las mismas a quien tenga algún asunto que tratar en ellas. Por ejemplo, las escuelas pueden excluir a todas las personas, salvo a sus alumnos, maestros, administradores y padres de familia. Los hospitales pueden excluir a todos, excepto a sus pacientes, el personal médico y los visitantes de buena fe. En las prisiones pueden ser excluidos todos, menos los reclusos, los oficiales de planta y los abogados.

No obstante, todas esas instituciones y muchas otras que podemos imaginar están expuestas a veces a las presiones de la ciudadanía e incluso de miembros de los medios informativos que exigen acceso a ellas para observarlas y, tal vez, criticar lo que allí se hace. Es posible que personas del público o de los medios deseen informar sobre presuntos abusos, corrupción, situaciones de sordidez u otras condiciones inadecuadas que, según varias suposiciones, se encuentran en esas instituciones. Se argumenta que, por el hecho de que éstas se financian con dinero del erario, el público tiene derecho de saber lo que sucede dentro de ellas. Por lo menos en el presente, los tribunales de los EE.UU. no han querido reconocer ningún derecho constitucional de acceso que se pueda aplicar de modo general a esas instituciones. Sin embargo, lo que algunas cortes sí han estado dispuestas a reconocer es el principio de la no discriminación. Si las instituciones conceden al público ciertos derechos de acceso —por ejemplo, visitas guiadas a las cárceles—, no pueden discriminar ni a los medios de información ni a los ciudadanos que se unan a esas visitas con el único fin de observar lo que allí ocurre y para recopilar información que pueda sustentar sus críticas a las operaciones de la institución.

El valor de la apertura

Todos los gobiernos, en todos los lugares y las épocas de la historia del mundo han tenido una inclinación intrínseca a mantener en secreto por lo menos una parte de sus actividades. Se trata de un instinto natural del ser humano y de un instinto natural de los gobiernos. Por lo tanto, una sociedad que desee tomar en serio la apertura, como un valor, deberá idear reglas que se inclinen en forma deliberada a favor de la apertura —con una incli-

nación a la transparencia mayor de lo que en principio parecería razonable— para contrarrestar la proclividad natural de los gobiernos al control, la censura y el sigilo.

En la era moderna estamos ante el desafío de asombrosos avances de las comunicaciones que implican revoluciones tan grandes de la tecnología como la imprenta y que prometen traer cambios drásticos en la forma en que recopilamos, almacenamos, organizamos y comunicamos la información. Un país que se compromete con una cultura abierta defenderá la expresión y la conciencia humanas en toda su maravillosa variedad y dará una firme protección a la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de credo, la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de hacer protestas pacíficas en masa. Estas libertades no sólo se extenderán al discurso político, sino a toda la gama infinita de la inquietud artística, científica, religiosa y filosófica que cautiva y seduce la imaginación humana.

Una sociedad que desea adoptar la apertura como un valor de suprema significación no se contentará con dar a sus ciudadanos una amplia gama de libertades para la expresión individual, sino irá un paso más adelante y abrirá en verdad los procesos de deliberación del gobierno para que se realicen a la luz del escrutinio público. En una cultura realmente abierta, la regla normal es que el gobierno no maneje a puerta cerrada los asuntos del pueblo. Los procedimientos legislativos, administrativos y judiciales deben estar abiertos al público en forma habitual. ■

Para lecturas adicionales:

Ellen Alderman y Caroline Kennedy, The Right to Privacy (Knopf 1995)

How to Use the Federal Freedom of Information Act, Reporters' Committee for Freedom of the Press (6ª ed., FOI Service Center)

Ithiel De Sola Pool, Technologies of Freedom (Harvard 1983)

Rodney A. Smolla, Free Speech in an Open Society (Knopf, 1992)

Sanford Ungers, The Paper & the Papers: An Account of the Legal and Political Battle over the Pentagon Papers (E.P. Dutton 1972).

Documentos de la
DEMOCRACIA

